



Columna



Aldo Manuel Herrera
investigador del Instituto Libertad

Ley de seguridad municipal y comercio ambulante

La última encuesta nacional sobre comercio ilícito de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) revela que la venta ambulante ha pasado de ser una actividad precaria a un brazo operativo del crimen organizado. Las cifras revelan que el 43% de los chilenos lo vincula con el narcotráfico y un 59% lo asocia a delitos directamente. La tolerancia de los vecinos a esta realidad se terminó: el 90% de los consultados pide fiscalización efectiva.

Ante esa demanda ciudadana, la nueva Ley de Seguridad Municipal es clave, la que debe ser implementada por las comunas de manera decidida. Hasta ahora, los municipios operaban en zonas grises, impotentes ante la violencia de las mafias. Sin embargo, el nuevo marco legal entrega, por fin, atribuciones contundentes a la gestión local.

El artículo 34 de la norma faculta explícitamente a los inspectores para incautar mercancías, incluso aquellas abandonadas en la huida, golpeando directamente la logística del negocio. Pero la ley va más allá: el artículo 20 habilita a los inspectores para detener en situaciones de flagrancia y autoriza el traspaso de los límites comunales durante la persecución. El delito no respeta fronteras administrativas.

El legislador también incluyó -en el artículo 43- la protección funcionaria, estableciendo el uso de elementos defensivos como chalecos antibalas, cascos y cámaras corporales. Esto profesionaliza al inspector, sacándolo de la indefensión y validándolo como un

agente protegido ante eventuales agresiones.

Bajo este nuevo estándar, la responsabilidad de los gobiernos locales es ineludible, pues constituyen la primera línea de contacto con el espacio público. La excusa de la falta de facultades ha desaparecido. La normativa no sólo permite actuar, sino que obliga a coordinar y refuerza la colaboración con las Fuerzas de Orden transformándola en una operación táctica real.

Los artículos 37 al 42 de la ley no son sugerencias; habilitan formalmente los patrullajes mixtos, permiten al municipio colaborar en controles de identidad y pruebas de alcohol e incluso fiscalizar medidas cautelares en violencia intrafamiliar. Ya no se trata sólo de “avisar” a Carabineros, sino de operar coordinadamente en el territorio bajo protocolos de riesgo definidos. En Osorno ya existe un avance en este punto, donde personal de Seguridad Ciudadana trabaja en conjunto con Carabineros para erradicar el comercio ambulante del centro y las inmediaciones del Terminal de Buses.

Recuperar los espacios públicos constituye una urgencia. Por eso resulta indispensable que las comunas también avancen en tener un catastro de los puntos críticos donde hay comercio ilegal (según un reciente estudio de la Asociación de Municipalidades de Chile, un 70% no tiene esa información).

Con la ley en mano, los alcaldes tienen el deber de transformar la fiscalización en una barrera real contra el delito.